

¹⁵ Alejandro Horowicz, op. cit.

¹⁶ Mijail Bajtín, *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*, Madrid, Alianza, 1987.

Prólogo

La democracia de la derrota

El peso de los muertos atormenta la conciencia de los vivos: Carlos Saúl Menem es el presidente de la República Argentina.

Evitar el triunfo peronista; para los votantes de extracción popular de la Unión Cívica Radical, por sobre todas las cosas se trató de evitar el triunfo peronista. En sus cabezas, peronismo era antesala de golpe de estado, de gobierno militar, de horror y de muerte. Entonces, para que no retornaran los militares, votaron por Eduardo Angeloz.

La muerte militarizada, la economía de guerra y las víctimas sociales de la guerra de clases quedaron inscriptas en la memoria colectiva. Por eso, los votantes populares del Frente Justicialista de Unidad Popular acaban de sufragar contra la economía política de la masacre, contra la continuidad que descarga sobre sus cabezas las furias del rodrigazo permanente. Esa vivisección del pasado resultó así: vincularon economía alfonsinista con economía militar, oponiéndole la mítica figura del general Perón impresa sobre el poncho provinciano del doctor Menem.

Algo queda suficientemente claro: la historia que nos tiene por protagonistas, víctimas y testigos, resulta insoportable. De ahí que se quiebre, se deshaga, y se rehaga, en la conciencia colectiva.

Para un hemisferio de las víctimas, el radicalismo garantiza que el pasado ominoso no retorne como presente insoportable. Para el otro, la insoportabilidad del presente resulta tan intensa que el pasado se fragmenta con beneficio de inventario: Perón y Gelbard, sí; Isabel y López Rega, no. La primera parte se eterniza, la segunda se ocluye.

Desde este abordaje limitado al imaginario político popular, ambas posturas encierran un nudo común: son tributarias del "Proceso". Es decir, se trata de horizontes construidos por la victoria del "Proceso", por la derrota de la voluntad moral de transformar revolucionariamente la sociedad argentina. En suma, el peso de los muertos atormenta de tal modo la conciencia de los vivos que la fractura del pasado es una operación exigida para la desmovilización del presente.

Este libro fue escrito hace cinco años. Intenta dilucidar el sentido de sucesivos peronismos preexistentes, así como su manifestación política actual. Es un texto con las claves del presente desde la perspectiva materialista de la historia; no he corregido sino erratas. El motivo? Una constatación fáctica: mi análisis no se ha modificado y las transformaciones políticas que el alfonsinismo imprimió al peronismo no lastimaron mis hipótesis de trabajo. Con una diferencia, las hipótesis se convirtieron —después de este 8 de julio de 1989— en fuerzas sociales vivas y, de más está decirlo, las fuerzas vivas no tienen por qué confirmarlas.

Una pregunta rehace, en consecuencia, los protocolos de lectura: ¿La victoria electoral del justicialismo construye un punto de inflexión para la derrota de 1976? ¿Estamos ante una versión corregida— de 1973?

El golpe del '76 constituyó un "tajo histórico". Un ciclo quedó concluido y otro arranca. Comenzó con la gestión militar, prosiguió con Raúl Alfonsín, y tiene en el FREJUPO su tercer gobierno. Todo el sistema político quedó resignificado. Ni la UCR tiene mucho que ver con la lucha de Hipólito Yrigoyen, ni el PJ con los sucesivos programas del general Perón. La formación económico-social que posibilitó la conformación del peronismo y el retorno del general Perón ya no existe, fue radicalmente transformada en sentido reaccionario. Resulta aventurado suponer que alguno o algunos se propongan sensatamente modificarla en sentido inverso. El bloque de clases dominantes tiene sobre este punto posición tomada: en su seno no se visualiza ninguna pugna decisiva y bajo las pancartas del FREJUPO no hay una masa rugiente y ansiosa de transformaciones revulsivas.

El cuarto peronismo arriba al gobierno sin haber dibujado proyectivamente un nuevo destino, una nueva tarea histórica. Esta ausencia permite afirmar: su victoria electoral difiere de la del '73. Más que abrir un cauce de inestabilidad revolucionaria, pareciera ahondar la estabilización del orden existente. Más que dirigirse hacia novedosas soluciones populares, se referencia en probadas recetas conservadoras. Y es en ese sentido que la alfonsinización de la política ha ganado al principal partido opositor de la etapa anterior.

DE la rugosa cadena de los acontecimientos registrados durante el gobierno alfonsinista, se impone establecer el sentido: la tendencia. Rehacer la cadena de significación mediante un montaje conceptual permite colegir, desde un universo fragmentario, el modo y la dirección con que se hilvanan los acontecimientos. En pocas palabras, naturaleza de la trama.

Cuatro ejes problemáticos recorrieron los sesenta y seis meses de gobierno del doctor Raúl Alfonsín: la relación con los terratenientes con los industriales, con el movimiento obrero y con las Fuerzas Armadas. La Sociedad Rural Argentina y sus aliados no sólo paralizaron la producción de productos agropecuarios¹ sino que tuvieron un enfrentamiento público con el presidente en la inauguración de la exposición de Palermo.² La Unión Industrial Argentina criticó en

ácidas solicitadas y no pocas declaraciones periodísticas y documentales la gestión radical. La CGT realizó trece paros generales y las Fuerzas Armadas, mejor dicho su cuerpo de oficiales, protagonizaron tres crisis militares.³ De modo que los empresarios chocaron con el gobierno los trabajadores también y los oficiales de 300 dólares mensuales se debatieron (y debaten) en crisis recurrente e insoslayable. Pese a todo, el gobierno alfonsinista no abrió el curso político a una crisis general de representación de las instituciones, a un golpe de estado.

Alimentando una vez más esa tendencia al pensamiento analógico (para comprobar su menguada capacidad explicativa), retrocedemos hasta encontrar una situación "parecida". El reloj se detiene en julio-agosto de 1975. En los tramos finales del gobierno de Isabel Martínez de Perón.

A la crisis militar se sumaba el descontento obrero, y al descontento obrero se agregaba la insatisfacción empresarial. En suma, el Gobierno no conformaba a nadie, a juzgar por la crítica de calles.

Si se razona por pura analogía (dos situaciones similares de disconformidad generalizada), el gobierno radical debería haber tenido los días contados. Nadie ignora que el 24 de marzo de 1976 Isabel voló literalmente por los aires (desviaron su helicóptero) para aterrizar definitivamente fuera del perímetro del helipuerto de la Casa Rosada.

En consecuencia, el problema debe formularse así: ¿qué cambió en la sociedad argentina para que, pese a la intensidad del conflicto social, el gobierno no corriera el menor riesgo?

En 1975 el aparato productivo, en sus términos, estaba intacto. La deuda externa apenas superaba los 9 mil millones de dólares,⁴ lo que equivalía a menos de tres años de exportaciones de la época. La capacidad industrial instalada ociosa no excedía el 30 por ciento en ninguna rama. Los bolsones de miseria no requerían de una política como el PAN y sólo el nivel de reservas monetarias mostraba saldo en rojo. Aun así, "bastaba" para revertir la tendencia (caída de reservas de libre disponibilidad) una política de "ajuste" de las tradicionalmente preconizadas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿por qué cayó Isabel en 1976? ¿Por qué Alfonsín culminó su ciclo a los tumbos?

La primera respuesta es casi obvia: entre Isabel y Alfonsín media el "Proceso". Es decir, la derrota del campo popular, de la clase obrera y sus aliados naturales. Se impone rehacer entonces la pregunta inicial: ¿de qué manera afectó el "Proceso" la estructura política nacional? ¿Qué vinculación hay entre esa transformación y el alfonsinismo?

Antes de proseguir, una digresión: no faltan los que sostienen: "el 'Proceso' fracasó, no cumplió con los objetivos enunciados; la lucha popular desalojó a los militares del poder y abrió paso a la democracia". Que ese "análisis" haya integrado la panoplia de argumentos oficiales no llama la atención. Pero que contenga

el nudo central de los razonamientos de la oposición parlamentaria remite a otros problemas; máxime, cuando la izquierda comparte, vergonzante o públicamente, la misma perspectiva con diferencias de matiz secundarias.

Tanta uniformidad llama la atención porque contraría cualquier modo de montar la secuencia de los acontecimientos. Nos ocuparemos primero de la red de los acontecimientos y luego de su formulación.

Entre 1976 y 1982, según el último censo publicado por el INDEC, la clase obrera industrial vio reducida su presencia en el aparato productivo en 300.000 plazas. De más de 2.100.000 operarios, cayó a 1.800.000, lo que equivale a una merma del 15 por ciento. La merma se vio acompañada de un recorte —a valores constantes— del salario-horario-real, que osciló, según la rama de que se trate, entre el 40 y 60 por ciento con relación al de 1974. Esta disminución en un lapso tan breve no tiene antecedentes en la historia política nacional. Para buscar un momento de salario obrero tan deprimido es preciso remontarse hasta el período 1930-1933. Es decir, las peores condiciones sobre las que se tiene registro estadístico.⁵

No se trata solamente de un incremento en la extracción de plusvalía absoluta y relativa. El producto bruto industrial per capita, que entre 1940 y 1975 creció ininterrumpidamente, se redujo a los valores correspondientes a 1970. El nivel de deterioro del consumo popular se vio acompañado por un proceso de reconversión industrial y concentración económico-financiera sin parangón histórico (en muchas ramas la concentración resulta más elevada que en los países capitalistas desarrollados).

Si a esto se añade que la gestión económica de José Alfredo Martínez de Hoz permitió la más formidable acumulación de capital que el bloque de clases dominantes obtuviera en período alguno (la deuda externa no es más que capital acumulado girado masivamente al exterior), se comprende que —en términos estrictamente económicos (unidades de producción, horas hombres trabajadas, unidades de capital por asalariado, número de asalariados)— la clase obrera retrocedió frente a la burguesía, al tiempo que el proceso de recesión permanente (aquí no nos referimos específicamente al Plan Austral) permite a esta última garantizar la tasa media de ganancia con el sencillo artilugio de incrementar el ejército permanente de desocupados y subocupados.

Dicho epigramáticamente: el enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado entre 1976 y 1982 arroja un vencedor absoluto: la burguesía.

Desde una perspectiva estrictamente social se comprueba, además, que las desventajas económicas construyen el iceberg de una catástrofe política: la desmovilización, el desbande del campo popular.

Desde que asumió el general Videla hasta que el general Bignone entregó los atributos del mando al doctor Alfonsín, el movimiento obrero realizó seis paros generales. Con una particularidad: tres fueron anteriores a Malvinas y tres poste-

riores. De los tres anteriores, sólo uno transcurrió bajo la gestión Videla (1976-1980), uno bajo el breve interregno de Viola, y el último pocos días antes de Malvinas (30 de marzo de 1982). De modo que la lobotomía social ejecutada por la dupla Videla-Martínez de Hoz no tuvo que soportar resistencia a gran escala (un paro general en cinco años, ¡y qué años!, de gestión).

Si se admite que el grueso de las transformaciones fue ejecutado bajo el gobierno del general Videla, algo queda claro: la clase obrera fue derrotada sin presentar combate decisivo, retrocediendo insensiblemente hasta su posición final. Los paros parciales —que los hubo, y muchos— fueron en rigor movimientos defensivos de la retirada, generados por el deterioro de las condiciones salariales y de trabajo. La ofensiva burguesa fue continua; el gobierno, en su carácter de único portavoz autorizado del bloque de clases dominantes, obtuvo, bajo los métodos del terror directo, la aquiescencia de la sociedad civil.

Y aquí, por cierto, no termina la cuestión. Una rápida lectura del libro de la CONADEP permite verificar indirectamente la derrota. El 60 por ciento de los detenidos-desaparecidos, según ese texto, son obreros. Más aun, no se trata de obreros elegidos al azar: son delegados y activistas fabriles, los mejores hijos de la clase obrera, su estructura de cuadros alternativos.

Sin embargo, salvo los organismos de derechos humanos y para algunas pocas corrientes de izquierda (ni siquiera todas, puesto que el general Videla era un “militar democrático que evitaba una salida pinochetista”), los organismos específicos de los trabajadores, los sindicatos, las comisiones internas, las agrupaciones sindicales, no elevaron entonces su voz y actualmente lo hacen, cuando lo hacen, de un modo débil y declarativo.

Este no es un juicio moral. Es un juicio político. La “incomprensión” de la dirección sindical (los obreros desaparecidos eran sus antagonistas políticos directos), la desvinculación del grueso de los asalariados, la fisura entre sus dramas cotidianos y el proceso de desapariciones constituyen un ingrediente esencial de su derrota política en el terreno conceptual.

Es preciso asimilar esto: los desaparecidos son un problema del presente, no una pieza del pasado. El “Proceso” no es una práctica, esencialmente, estrictamente militar. Las Fuerzas Armadas fueron, son, el instrumento con que el bloque de clases dominantes modeló una nueva sociedad por cuenta y riesgo de sus tenedores sociales y políticos. Responsabilizar únicamente a los militares de lo que pasó supone vaciar, hacer desaparecer, la responsabilidad insoslayable de los beneficiarios del “Proceso”. Es preciso afirmarlo inequívocamente: el “Proceso” tuvo beneficiarios y víctimas. No perjudicó a todos. Sostener: “perjudicó a todos” equivale a borrar de un plumazo los intereses de clase.

Los beneficiarios del “Proceso”, los tenedores de la deuda externa depositada en los bancos extranjeros, hallaron la forma más sutil para enmascarar su victoria: el juicio a los nueve comandantes.

Si los militares triunfaron —razonan los abogados de los derechos humanos—, ¿cómo se sentaron Videla, Viola y Galtieri en el banquillo de los acusados? La lucha de clases desconoce la gratitud. Los que durante el “Proceso” no vacilaron en apoyarla masacre clandestina (ni el radicalismo ni el peronismo la condenaron antes de 1979), después se rasgaron las vestiduras democráticas.

El “Proceso” triunfó entre 1976 y 1980. Cumplió cabalmente su programa económico, político (destrucción física, moral e intelectual de toda la oposición dinámica) y social (debilitamiento y quiebra del bloque jacobino forjado entre 1969 y 1973) y —para garantizar la continuidad de sus objetivos, hoy ampliamente realizados (eternización del cuadro político-económico)— requiere que los militares, los procesistas visibles, cuiden, protejan, consoliden sus intereses poniendo (aunque sea transitoriamente) la cabeza en el tajo. Transformó, así, a generales de 700 dólares mensuales en el chivo emisario de su política de desapariciones permanentes.

Como el “Proceso” quedó reducido a “los militares” y el gobierno uniformado tuvo que retirarse por “el embate popular”, con juzgar a los oficiales superiores, con el juicio de las juntas, el caso quedaba cerrado. El bloque de clases dominantes no tenía el menor empacho en entregar a las juntas (ni siquiera debía asumir públicamente la “entrega”, puesto que la “responsabilidad” final correspondía al gobierno radical) si de ese modo cubría sus espaldas con el grueso manto de la justicia burguesa. Esta fue la función de esa justicia: probar que los masacradores y la política de la masacre no se tocaban, que los intereses del bloque burgués y los de la masacre eran antagónicos. En suma: establecer una barrera china entre el uso del partido militar (política instrumental) y la gestión extramilitar, gubernamental, del partido militar.

Por eso los jacobinos de la perspectiva “juzguemos a todos los militares” obturaron, obturan, el problema. En lugar de apuntar contra los principales responsables de la farsa jurídica y denunciar la relación umbilical entre el cuerpo de oficiales y el bloque burgués, propusieron juzgar hasta cabo primero, sin incluir (de más está decirlo) a ningún civil en el paquete.

Esta perspectiva dificultó las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, pero no inquietó a los beneficiarios del “Proceso” que, casualmente, fueron asimismo los beneficiarios de la gestión alfonsinista.

No se trataba de evitar, posponer, el juicio a los militares responsables, sino de incluir en el juicio a todos los responsables con absoluta prescindencia de su carácter de militares. Las Fuerzas Armadas respondieron a sus mandos; en su carácter de presidente, el general Videla era el responsable supremo del gobierno y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nadie ignora que los ministros son solidariamente responsables con el presidente en su gestión política y consecuentemente imputables por ella. Entonces, se trataba de juzgar, cuanto menos, a los responsables políticos de los intereses del bloque dominante (Martínez de

Hoz y Cía.) en idéntico juicio; el juicio al “Proceso”, no el juicio a los procesistas militares.

Comencemos de nuevo. Los militares, el cuerpo de oficiales, prestaron su cuerpo para ocultar el cuerpo del delito. Con la desaparición de los procesistas (el juicio pone fin a su existencia jurídico-política) desaparecían por contigüidad y desplazamiento los detenidos-desaparecidos. Al volatilizarse los beneficiarios se volatilizaba la culpa y al volatilizarse la culpa el problema tendía a desaparecer. En la división de tareas propuesta por el bloque burgués, el lugar de los militares resultaba transparente: “Ustedes (los militares) son responsables de todo; nosotros (los civiles) siempre fuimos democráticos. Entonces, el gobierno civil (de todos, inclusive de los militares) es la garantía de juicio imparcial para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Ustedes (los militares) se hicieron cargo del control del Estado, y como se hicieron cargo pasó lo que pasó. Se trata, en consecuencia, de que nosotros (los civiles), a través del gobierno legal, administremos prudentemente la crisis heredada, para que ustedes (los militares) no hagan falta nunca más”.

Resumamos: primero desaparecieron los antagonistas políticos dinámicos (30.000); después desapareció un fragmento significativo de la clase obrera (300.000 flamantes desocupados); mientras tanto y más adelante, el campo popular pagó la derrota con el deterioro de su calidad de vida, con el cercenamiento de sus conquistas sociales y políticas, con la pérdida de su carácter de ciudadanos, con la ampliación y multiplicación de los bolsones de miseria.

Dicho con todas las letras: la masacre fue posible porque los masacradores lograron establecer cuñas entre los segmentos dinámicos de la oposición política y el grueso de los trabajadores, entre el grueso de los trabajadores y el grueso de las capas medias. Las cuñas resultaron viables porque la dirección de los segmentos dinámicos equivocó groseramente su rol, debilitando el papel de la dirección alternativa del movimiento obrero; porque la dirección sindical traicionó los intereses elementales de los trabajadores facilitando la desmovilización de la lucha; porque la clase obrera no fue capaz de constituir, en sus movimientos defensivos, una dirección diferenciada. En síntesis: tal como fue ejecutada, la masacre resultó posible porque la clase obrera no combatió: fue derrotada sin batalla decisiva.

Finaliza aquí la digresión. Avancemos ahora hacia la segunda mitad de la segunda pregunta: ¿por qué la izquierda no aceptó lo obvio? ¿por qué no asumió (¿por qué no asume?) la derrota?

Antes que otra cosa digamos que nosotros partimos de una premisa gramsciana: la verdad es revolucionaria. La derrota es un fragmento de la verdad, pero no toda la verdad. El otro tramo pasa por dilucidar el comportamiento de los derrotados: la izquierda como sujeto político. Precisemos: entre 1955 y 1973, la clase obrera fue expulsada de la ciudadela parlamentaria. No podía votar al jefe

no proletario del arco popular. Para hacerlo debía no votar (votar en blanco) o atreverse si no a quebrar revolucionariamente la política de fraude sistemático (proscripción) de la voluntad mayoritaria y conquistar así definitivamente su carácter de ciudadanos de pleno derecho.

En esas condiciones era obvio que la candidatura del general Perón excedía los límites del peronismo, para constituirse en bandera de unidad de todo el arco nacional-revolucionario. Sobre todo, cuando el peronismo mostraba, una y otra vez, su incapacidad para luchar consecuentemente por ese objetivo.

Para la izquierda anterior a 1976 el problema pasaba por golpear junto a las masas trabajadoras peronistas legitimando, de ese modo, su derecho a enarbolar un programa diferenciado. Vale decir se trataba de garantizar socialmente el programa socialista, defendiendo consecuentemente el nacional-democrático de la sociedad civil.

Utilizando una vieja y justa fórmula de Lenin: un demócrata consecuente deviene un socialdemócrata revolucionario (bolchevique). Se trataba de vincular la impotencia democrática del peronismo (mayoría en el movimiento obrero, mayoría electoral) con su propuesta política y de este modo dar vuelta la fórmula leninista: sólo un socialista revolucionario era capaz de defender el derecho de Perón a ser candidato.

En rigor, los integrantes del Partido Justicialista estaban más que dispuestos a “olvidar” todas las veces que hiciera falta los contenidos plebeyos de esa candidatura, abandonando la candidatura misma. En ese “olvido” a que estaba dispuesto casi todo el arco político, quedaba retratado su estigma de clase.

De modo que cuando la cuestión democrática contenía claros ingredientes jacobinos, cuando vinculaba el programa socialista con el nacional-democrático en el territorio de la lucha de clases, cuando ilustraba sobre el recorte de los derechos políticos de los trabajadores y el conjunto del arco popular, la izquierda era reformista, insurreccionalista o foquista. Era cualquier cosa menos lo que tenía que ser. Su radicalismo encendido encubría su gorilismo de entonces y su renuncia al radicalismo descubre su “sensatez” actual; su defensa de una democracia vaciada de todo contenido progresivo, reducida a su cáscara formal, subsumida en un modelo de realismo que sólo sirve al statu quo, cumple idéntico rol histórico.

Volvamos al comienzo. Si la clase obrera fue derrotada, si el campo popular fue derrotado, el gobierno radical (con absoluta prescindencia de su voluntad) expresó esa derrota. Entonces, la fractura de la clase obrera (un segmento significativo votó al doctor Raúl Alfonsín el 30 de octubre de 1983), en lugar de remitir a una comprensión vanguardista de la cuestión democrática, supuso la primera cuantificación electoral del retroceso político.

De ahí que la lucha por llenar de contenido la democracia de Alfonsín hubiera cobrado (de haber existido) el mismo sentido que la lucha contra el gobier-

no, que la lucha contra la implementación de su propuesta. No faltaron los izquierdistas que festejaron la victoria radical. A su juicio, el peronismo no garantizaba la continuidad del proceso democrático; el gobierno expresaba, en consecuencia (insuficientemente, distorsionadamente), el alza democrática, la voluntad de lucha antidictatorial del conjunto de la sociedad argentina. Por eso, era preciso aceptar, transitoriamente, las reglas de este juego democrático.

Rechazar la derrota permitió, entre otras cosas, no enfrentarse ‘ con el gobierno, darle tiempo (en el imaginario izquierdista) para que revisará la herencia indeseada, evitando que los uniformados resultaran a la postre los vencedores mediante la implementación del pacto militar-sindical. Se trataba de evitar que los “vencidos”, que los militares vencidos, se hicieran cargo de la democracia nonata.

Algo quedaba flotando en el aire, difícil de fijar: ¿de qué “vencidos hablaban?”, ¿qué operación política les permitió derrotar a las Fuerzas Armadas? La respuesta, casi obvia: la guerra de Malvinas. No nos proponemos analizar aquí la guerra del Atlántico Sur tan solo nos vamos a ocupar de su efecto inmediato: la caída del General Galtieri. En el momento en que el resultado de la guerra había alcanzado dominio público (rendición del general Menéndez) quedaban expedidos dos caminos para el gobierno militar: proseguir la guerra o irse. Continuarla desde tierra firme no sólo habría supuesto un cambio de orientación política sino el prólogo de una nueva guerra civil. Malvinas no es propiedad de la burguesía argentina y su reconquista excede el programa material de esta clase.

No se trataba de la continuación de la guerra que preventivamente habían lanzado sobre el bloque de clases dominadas, para homogeneizar el frente interno de las dominantes. Era otra cosa. Las Fuerzas Armadas cambiaban de bando. Para poder librar esa guerra debían enfrentarse abiertamente con el bloque cuya política ejecutaron y en nombre de cuyos intereses masacraron. Era lanzarse demasiado lejos. Por eso el partido militar retrocedió horrorizado; horrorizado por su propia lógica interna.

Con absoluta independencia de la valoración que de Malvinas se tenga, algo resulta obvio: los militares lanzaron el operativo en el intento de legitimar su permanencia en el poder. El programa del “Proceso” había sido cubierto mediante la gestión Martínez de Hoz; una cuestión quedaba todavía a medio resolver: la seguridad de los masacradores.

El bloque dominante antes de Malvinas había sido claro: se les había acabado el tiempo, llegaba la hora de los partidos políticos. Balbín habló del último turno militar y propuso, mientras tanto, que designaran de consuno al nuevo presidente. Las Fuerzas Armadas se negaron a escuchar. En su carácter de salvadores de la patria, atribuían al resguardo de su seguridad una importancia que no tiene: la seguridad del sistema mismo. Este “error” de conceptualización institucional costó la cabeza de nueve comandantes en jefe.

La plana mayor del cuerpo de oficiales fue víctima de una ilusión ideológica: confundió el cuerpo del estado con el suyo propio.

En determinadas coyunturas un cuerpo (los oficiales) constituye el soporte del otro... cuerpo (el estado); pero fundir, confundir, función con órgano o, mejor dicho, reemplazo funcional con tarea orgánica, en anatomía resulta grave y en política letal.

Cuando nos interrogamos sobre los motivos de la estabilidad de Alfonsín y de la inestabilidad de Isabel, preguntamos lo siguiente: ¿cuándo un partido de gobierno deja de ser un partido de estado?, ¿cuándo una crisis de gobierno se transforma en crisis del partido de gobierno?

Al asumir el doctor Cámpora se abre el curso de una crisis ministerial.

El frente que ganó las elecciones se debatía entre mantener el arco social que le proporcionó la victoria o, por el contrario, ejecutar el programa político con que esa coalición había arribado al gobierno. Cámpora no resolvió una cosa ni la otra. Entonces, los defensores del programa, con Perón a la cabeza, transformaron la crisis de gabinete en crisis de gobierno y Cámpora se vio obligado a renunciar.

Sin embargo, la crisis de gobierno no se retrajo en crisis del partido de gobierno. La razón: una: Cámpora no hegemonizaba políticamente el Partido Justicialista. De lo contrario, la crisis del partido de gobierno hubiera resultado inevitable. Como Perón, indiscutiblemente, era el único jefe del partido de gobierno, estaba en condiciones de intentar la puesta en ejecución de ese programa. De modo que la defensa del programa —partido del estado— exigía la quiebra del arco social que lo votó —partido de gobierno—. La exigía porque los beneficiarios sociales del programa y sus votantes reales coincidían sólo en el papel. Aun así, Perón no vaciló: quebró el arco e intentó garantizar la continuidad de su proyecto, instalándose personalmente en el puente de mando.

En el interregno entre Campora y Perón, el justicialismo debió relegitimar sus títulos consensuales. Perón lo hizo magistralmente. Obtuvo mayor adherencia social que el dentista de San Andrés de En ese punto las jefaturas del partido de gobierno y del partido del estado constituían, conformaban, una jefatura única.

La caída del gobierno del general Perón habría puesto en crisis el sistema en su conjunto. Por eso, ninguna fuerza del bloque de clases dominantes atacó frontalmente al gobierno. Por eso, las Fuerzas Armadas, pese a su proverbial gorilismo crónico, respondieron disciplinadamente toda orden presidencial.

Es que el partido de gobierno se define en relación con el arco que lo votó. Está determinado por su adherencia social a una política. Un partido del estado, en cambio, se define exactamente al revés. El bloque de clases dominantes decide si determinado partido satisface adecuada o inadecuadamente sus intereses y, consecuentemente, si sigue siendo un partido del estado. El gobierno es el estado de intersección físico entre partido de gobierno y partido del estado. Mientras

esta operación es posible, el camino parlamentario viable porque de allí surge el consenso que permite ejecutar ese doble y contradictorio mandato.

En la figura del general Perón estos cruces se produjeron hasta su política (el Pacto Social) estalló. Con la muerte de Perón el justicialismo quedaba sin jefe y sin programa. Isabel heredaba, entonces la crisis de gobierno. Y esa crisis —en tanto que lesionaba los intereses de su base social (la partidaria, se entiende)— la hacía trastabillar como partido de gobierno. La pérdida creciente de base social, sumada a la necesidad del bloque burgués de redefinir su propio perfil programático, recortó crecientemente su viabilidad como partido del estado. No bien el bloque de clases dominantes, a través de la APEGE explícito inequívocamente su repudio al gobierno, Isabel perdió su doble carácter: jefa del partido de gobierno, jefa del partido así estado.

Entonces, la crisis del gobierno no tenía nada que ver con la así estado, sino en la medida en que se constituyera en obstáculo para la emergencia de un nuevo partido del estado. En cuanto quedó claro que del arco parlamentario no emergía un nuevo partido de gobierno (las realineaciones de congresales no resultaron suficientes), las Fuerzas Armadas asumieron su doble carácter potencial: partido y brazo armado del estado, el viejo y archiconocido partido del orden.

En rigor, su doble carácter es una ficción. Las Fuerzas Armadas asumen el espacio del partido del estado cuando el Parlamento no está en condiciones de proporcionar ningún otro instrumento fiable. Por su carácter de brazo armado del estado potencian la naturaleza de cualquier crisis de gabinete, poniendo (en algunos casos) en entredicho la existencia del estado mismo.

Es que la derrota de un gobierno militar no es derrota que pueda desconocerse así como así por parte del bloque de clases dominantes. En todos los casos de crisis del partido de gobierno normal (parlamentario), el arco burgués culpa a los operadores políticos concretos (Isabel) y ala base social que en algún momento los sostuvo (la clase obrera, los sindicatos). Este oscurecimiento ideológico está facilitado por el modo en que la lucha de clases es percibida por el bloque dominado.

Dicho de otra manera: la crisis de un partido de gobierno es siempre la crisis de una política fraccional del arco burgués. Significa la inviabilidad de su programa explícito-implícito; constituyéndose en crisis que el bloque de clases dominantes descarga sobre la sociedad civil en beneficio de su nueva realineación interna.

Ahora bien, el general Videla había asumido el carácter de jefe del partido militar (partido del estado) y jefe del gobierno. Ese carácter se conserva en distintas direcciones. Su jefatura de gobierno es consensúa!, pero de consenso corporativo (interna militar): es el resultado posicional del cuerpo de oficiales en el cuerpo del estado. Pero la posición del cuerpo de oficiales (cuando el partido militar no se hace cargo de la gestión militar directa) está vinculada a sus lazos so-

ciales con el bloque de clases dominantes, por una parte, y ala relación de fuerzas entre las clases antagónicas, por la otra. Sin olvidar la naturaleza de su vínculo orgánico con el estado en tanto su brazo armado. Entonces, acostumbrados a ejercer el rol de fiel de labalanza, funden, confunden, papel instrumental con rol independiente.

A lo largo de cinco años cualquier ataque contra la junta militar se transformaba, *mutatis mutandis*, en ataque contra el estado y cualquier ataque contra el estado se penaba con sanción única: la muerte.

Para que así fuera, cualquier ataque contra cualquier burgués equivalía a un ataque contra la propiedad privada y todo ataque contra la propiedad, a uno contra el estado. Por eso, cuando un dirigente obrero impulsó una medida de lucha (el caso de un trabajador que volanteó en Plaza Constitución el primer paro de la CGT) se transformó en delincuente subversivo y como tal fue tratado. Pena para un subversivo, la muerte: lo fusilaron en Plaza Constitución.

Estábamos frente a un estado casamata: de absoluta rigidez. Un estado que se podía tomar por asalto en maniobra envolvente ron batalla decisiva. El poder era, incluso, un espacio físico concreto: la Casa Rosada. El conjunto de clases dominantes lo sabía, lo toleraba.

Era el precio de la transformación requerida para estabilizar reaccionariamente a la sociedad argentina.

Mientras el programa de Joe estaba por concretarse, el respaldo fue absoluto Incondicional. Con todo, el gobierno del arco burgués amordazaba a la burguesía. Eran las reglas del juego; las aceptó. Una vez que la operación de cirugía mayor concluyó, el gobierno militar sobraba. Sonó la hora de los políticos y los políticos retornaron con trompetas y timbales.

El general Videla se ve obligado a defender a su ministro de Economía el Día de la Industria. Curiosamente, el ataque proviene del presidente de la Unión Industrial Argentina; es decir, del mismo riñón del bloque de clases dominantes. Hasta ayer no más, Oxenford expresaba su inmensa conformidad con todo lo actuado. Por esas semanas, el presidente de la única sucursal de la Ford que gana dinero en el mundo entero —por 1980, se entiende— se transforma en implacable crítico gubernamental. Empresarios nacionales y multinacionales dicen basta. Todas las expectativas están jugadas a las patas de Viola: al general en jefe de la masacre se destinan las más diversas zalamerías: callado como Yrigoyen, carismático como Perón, incisivo como Frondizi para las conferencias de prensa con preguntas urticantes. En los Estados Unidos, en una oportunidad, había replicado a un periodista: “Si Hitler ganaba la guerra, los juicios de Nüremberg se hacían en Virginia”.

Pero el general no las tiene todas consigo. Si atiende a los hombres de la Multipartidaria, pierde sustento militar. Si pierde el sustento militar, deja de ser presidente. La tensión lo inmoviliza. De la mano de Lorenzo Sigaut hace lo que

puede: no es suficiente. Enfermo de rabia e impotencia se va a la casa tras breve y educativo interregno. El entonces ministro del Interior, general Liendo, toma las riendas del gobierno y restablece, Cavallo mediante, el interés global del bloque de clases dominantes: licuar la deuda privada interna y transformar la privada externa en externa pública, vía seguro de cambio.

El doctor Cavallo coronó, entonces, exitosamente el programa del partido del estado. Los objetivos estaban sobradamente cumplidos. Un ministro colado por la ventana (Cavallo tenía el rango de subsecretario de Estado) desata una inflación galopante, destroza el salario obrero y las ilusiones en dólares de la clase media, después de que los empresarios han tomado seguro de cambio para sus deudas en dólares. Es decir, después de que el estado transformó la deuda externa privada en pública y la pública en papel mojado. Cavallo es a los excesos económicos lo que el gobierno alfonsinista a los políticos: los pone en caja.

Formulado descriptivamente: el general Viola, en lugar de encabezar el gobierno de mayor estabilidad y respaldo, el más sólido desde 1976, descubre insólitamente su inaudita labilidad. La cintura negociadora, las horas de reuniones, la telaraña de vínculos pacientemente hilvanados con políticos y sindicalistas, con empresarios y banqueros, con procesistas y opositores, muestran síntomas de desintegración.

La debilidad de Viola poco tiene que ver con la medianía de su personalidad, ni siquiera resulta atribuible a un retaceado respaldo militar. O —como gustaron denominar los convencionales comentaristas políticos de los grandes diarios— a la falta de un Viola de Viola (juego que establecía una correlación poco menos que indestructible entre Videla-presidente y Viola-comandante en jefe del Ejército). Es cierto que la Marina intentaba fracturar al Ejército bajo el ariete de la conducción masserista, pero la interna militar nunca se escapó de las manos de Viola mientras fue “interna”. La falta de respaldo social objetivo redujo su poder a poder armado directo. La maquinaria del estado comenzaba a girar en un aire enrarecido. Y ese aire (falta de suficiente respaldo social) contaminaba, recorría a las Fuerzas Armadas liquidando de un plumazo al hombre fuerte del “Proceso”, al jefe militar de los procesistas.

Las razones burguesas para no respaldar habían resultado transparentes: no tenían ninguna razón para mantener desparlamentarizado el estado.

El bloque de clases dominantes había resuelto el grueso de sus diferencias históricas. Las que sobrevivían se adecuaban al tratamiento parlamentario. Los antagonistas políticos carecían de envergadura social, y los sociales, de adecuada representación política (los conflictos permanecían larvados). La paz de los cementerios se confundía con la paz social, porque el terror, el desbande y la derrota del campo popular carecían hasta ese momento de punto de recomposición. Un solo enemigo emergía en el horizonte como antagonista conceptual: el go-

bierno militar. Por eso, resultaba más adecuado organizar un ordenado retorno a la democracia.

Dicho categorialmente: el partido militar había perdido su carácter de partido del estado, era imprescindible que volviera a ser tan solo su brazo armado (partido de gobierno nunca había sido). Para el bloque de clases dominantes, el interés ahora pasaba por impedir el más mínimo independentismo militar. Es decir, trabar, evitar, obstaculizar y llegado el caso combatir, para que las Fuerzas Armadas no cristalizaran una alternativa política propia.

Resumiendo: para el arco burgués, el gobierno de Viola, en tanto había amenazado transformarse en partido de gobierno, fue un antagonista político. La caída de Viola, consecuentemente, debe ser interpretada como una exitosa maniobra del establishment contra el independentismo militar. De ahí su irrestricta soledad social.

Con las instituciones democráticas, se abandonó el estado-fortaleza, sustituyéndolo por una tenue línea de fortificaciones sincronizadas, donde la caída de cada una de ellas por separado, no ponía en peligro (todo lo contrario) al sistema en su conjunto.

Un paro general pierde entonces el carácter de actividad subversiva. La crítica frontal al gobierno no alcanza el status de sabotaje contra el estado. El triunfo o la derrota de una determinada política no se vincula al triunfo o la derrota de un gobierno, y mucho menos pone en entredicho la naturaleza del estado mismo. La victoria radical o peronista deja de dirimirse a punta de bayoneta. No se trata, como proclaman algunos ingenuos y otros que no lo son tanto, de una suerte de novedosísima “civilización política”, de aprendizaje doloroso pero útil. Nada de eso. Más bien permite verificar la estabilidad, la estabilización reaccionaria, la solidez con que el bloque de clases dominantes sometió a las dominadas. Traducido con máxima crueldad: muestra la efectividad, la consistencia de la derrota.

Esa es la clave del gobierno alfonsinista, de la estabilidad de Alfonsín. Precisamente, la efectividad de la derrota facilitó la hegemonía político-ideológica del arco burgués, por la masa de terror flotante insuficientemente metabolizado, por la falta de un referente fijado en el pasado de las luchas del presente, por la extrema debilidad de las luchas del presente.

Y como todo eso construyó el arco ideológico, la renuncia de un ministro, el tropiezo de una política, la crisis de un gabinete, hasta la renuncia de un presidente (con el poder parlamentarizado) perdieron carácter dramático. Fue posible desdramatizar la política argentina, los mecanismos de represión directa habían resultado antieconómicos. Los otros mostraron ser más eficientes y menos costosos.

La propuesta es simple: realimentar el alicaído sistema de partidos parlamentarios, impulsar, reimpulsar, la capacidad regenerativa de los partidos de gobier-

no; impedir la cría del “Proceso”. Los militares, en cambio, visualizaban el “Proceso” como una reedición ampliada y mejorada de la Revolución Libertadora, entendiendo que el fracaso de la Libertadora estaba ligado al de la gestión militar indirecta. Atribuían ese fracaso a la dificultad de actuar a través de expresiones políticas que no eran cristalización directa del universo cuartelario. Entonces, el camino era obvio: un partido del “Proceso”. Pero no cualquier partido, sino el de los partidarios del procesismo militar.

Esta vez, a diferencia de entonces, estaban avisados por la experiencia. Y como lo estaban, actuarían adecuadamente.

Consta en autos que el establishment odia los experimentos económicos. Entonces, para acompañar al general Galtieri, eligieron a un conservador probado: Roberto Alemann. Con ese colaborador y esa cobertura ideológica el general majestuoso se lanzó a conquistar, en homérico asado, a todos los conservadores dispuestos a impulsar la cría del “Proceso”. El número de participantes, con ser impresionante (más de diez mil comensales) constituía una apoyatura social insignificante: nunca tantos representaron tan poco.

De modo que Galtieri, lanzado por la misma ruta que Viola, intentó construir un partido de gobierno. Ante la pobreza del resultado, mudó de táctica. La política sustitutiva se denominó Malvinas.

El resultado del intento no requiere mayores aclaraciones. Pero la clave pasa por el balance que del intento se haga. No existió movimiento militar de mayor independencia relativa respecto del bloque de clases dominantes que el ejecutado en ese período. Tan independiente resultó, que la guerra fue encabezada por un gobierno que ninguna clase social reconocía como propio; al tiempo que sus representantes políticos (salvo Rogelio Frigerio y el ingeniero Alvaro Alsogaray) mantenían ambigua distancia y verbal identificación.

Oponerse equivalía a ser declarado “infame traidor a la patria”. De modo que mientras el doctor Alemann explicaba que no ejecutaría una política económica de guerra (cosa que cumplió de cabo a rabo), es decir, que no acompañaría el esfuerzo bélico del gobierno que integraba, Galtieri libraba “su” guerra con la OTAN.

Se equivocan los que sostienen que la anterior guerra sucia suponía esa guerra limpia. Salvo que la lucha de clases se reduzca a la dinámica militar, desvinculando esa dinámica de la sociedad viva. Lo que la guerra sucia imponía, eso sí, era un resultado a la guerra limpia: para el bloque burgués la derrota en Malvinas facilitaba la construcción de su victoria sobre el independentismo militar. Todo intento serio por alcanzar la victoria (posible, por cierto) requería cambiar la conducción de la guerra. Cambiar la conducción de la guerra hubiera sido un episodio que modificaba la misma guerra puesto que requería, prima facie, de una partera compleja: la guerra civil.

El bloque burgués se cuidó muy bien de atacar abiertamente al gobierno mientras la batalla se desenvolvía. Esperó el desenlace (nunca dudó de la derro-

ta). Recién entonces impuso, una a una, sus condiciones iniciales: vuelta al parlamentarismo, retorno a la democracia; el festín de los corruptos recomenzaba.

Por eso, considerar la derrota militar, esa derrota militar, como victoria popular, tiene una perspectiva de clase inequívoca. Salvo, claro está, para los que creen que Margaret Thatcher es una aliada “natural” de la democracia en el mundo entero.

Así como en el pago de la deuda externa el sistema bancario internacional no entra necesariamente en contradicción con el bloque burgués, en la guerra de Malvinas las tropas británicas expresaban exactamente ese arco social.

Conviene desenvolver mínimamente la cuestión de la deuda. Los bancos cobran la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva: la diferencia entre la tasa que pagan a los depositantes y la que cobran al tomador. El grueso de los depositantes argentinos en el exterior anudan, suman la deuda externa privada y la mayor parte de la pública. Según quien saque la cuenta, la deuda oscila entre nueve décimas partes del total y por encima del total. De un modo o de otro, el no pago de los servicios afecta la solvencia de los bancos (al menos lesiona su tasa de ganancia) y al afectarla dificulta que los depositantes argentinos cobren sus intereses en el exterior. De ahí que banqueros e inversores (bancos extranjeros y nacionales) no hayan tenido en ese período diferencias esenciales en la materia.

Otro tanto sucedió en la guerra de Malvinas. Para el bloque burgués el “Proceso” estaba agotado. Para las Fuerzas Armadas era imprescindible continuar (así lo entendían por razones de seguridad individual, colectivamente consideradas). El continuismo militar, en esas condiciones, potenciaba el independentismo militar. Por eso, era y es interés del bloque de clases dominantes fijar una barrera intraspasable al independentismo militar. Como no disponían de una fracción militar en condiciones de imponer sus términos sin batalla abierta (una quiebra podía gatillar una parodia de guerra civil) operaron indirectamente: a través de las tropas de Su Graciosa Majestad.

Para el bloque imperialista en su conjunto, para los británicos en particular, es factible negociar con China la devolución de Hong Kong dentro de las reglas del juego (China es una nación relativamente independiente y políticamente autodeterminada), pero si Fidel Castro no invade Guantánamo, la recuperación de Malvinas sólo puede inscribirse como prólogo de una guerra civil que resuelva tareas nacionales pendientes en el marco de una batalla anticapitalista de proporciones continentales.

Por eso los británicos reaccionaron con máxima dureza. Y la gesta de Malvinas, que en la cabeza del Estado Mayor Conjunto formaba parte de una junta diplomática (tanto que el principal funcionario a cargo del operativo era el canciller) donde se contabilizaba el respaldo norteamericano como dato central e inmodificable, concluyó en masacre adicional.

El exponente de la nueva relación de fuerzas, de la derrota militar en manos de la Task Forcé, resultó otro oscuro oficial retirado. Para que el general Bignone

accediera a la presidencia fue preciso que las Fuerzas Armadas se fracturaran (sólo contaba con el respaldo del Ejército), que la Marina y la Aeronáutica dejaran de responsabilizarse por la gestión gubernamental en defensa del independentismo militar (proseguir la construcción de un partido de gobierno), y que el independentismo no fuera capaz de articular política alguna.

El Ejército, solo, interiormente destrozado, políticamente liquidado, sin jefes, reducido a un programa anticomunista de escuela de inteligencia, sin matices, estaba en condiciones más que perfectas para proseguir el papel de personero incondicional de los intereses estratégicos y coyunturales del bloque burgués de clases dominantes.

En esas condiciones su única política fue la sobrevivencia: se limitó a buscar, en el arco de los partidos parlamentarios del período anterior, un acuerdo que garantizara las testas físicas y consecuentemente, su lugar (el del cuerpo de oficiales) en el cuerpo del estado; lo encontró: el peronismo. En el viejo peronismo del pasado, en su frondosa mitología política, el movimiento se pensaba a sí mismo como una alianza entre el interés industrial nacional, las Fuerzas Armadas y los sindicatos. No importaba si esto era efectivamente así: los militares estaban dispuestos a prestarle oídos y los peronistas, convencidos de su inexpugnabilidad electoral, suponían que conquistaban un gobierno indestructible; neutralizaban al único enemigo capaz de desalojarlos del poder: el Ejército.

Para el radicalismo, en cambio, el problema era, es, exactamente el opuesto. Le interesan las Fuerzas Armadas como institución y no requiere de su adhesión a una determinada política de gobierno. Sólo necesita su respaldo profesional (brazo armado del estado) y lo conserva mientras no pierde su condición de partido del estado. Si es así, si el radicalismo reagrupa detrás suyo al bloque de clases dominantes, la buena o mala voluntad del cuerpo de oficiales constituye una anécdota menor.

Por eso, la denuncia del pacto militar-sindical que Alfonsín realizara bajo la guía teórica de Germán López era muchísimo más que una martingala electoral. Expresaba, indirectamente, la absorción por parte de la UCR de un objetivo estratégico del bloque burgués: impedir que las Fuerzas Armadas construyeran la más mínima ilusión respecto de la posibilidad de enarbolar una propuesta de gobierno diferenciada. Demostraba la consustanciación del nuevo radicalismo con el nuevo equilibrio hegemónico del poder social.

Ilustremos la afirmación. En el último tramo de Bignone las Fuerzas Armadas habían dictado una ley que políticamente se denominó “autoamnistía”. El doctor Italo Luder, en su carácter de candidato presidencial del justicialismo y en su condición de catedrático universitario de Derecho Constitucional, explicó de este modo la cuestión legal: en caso de que el Congreso anule esa ley, sus efectos jurídicos resultarán, de todos modos, irreversibles. Es decir, la autoamnistía puede ser moralmente reprochable, pero jurídicamente exculpará a todos los mil-

itares, sin distinción de grados, de toda responsabilidad legal. Es que ninguna ley —había explicado Luder— puede tener efectos retroactivos. De modo que el juez está obligado a utilizar la que beneficia al reo, siempre y cuando el delito fuera anterior a su promulgación definitiva. Entonces, como ése era el caso, los masacradores rendirían sus cuentas en el reino de los cielos.

Alfonsín, en cambio, sostuvo exactamente la tesis opuesta. A su juicio la ley, su dictado, resultaba inconstitucional. Consecuentemente, no se trataba de una ley, carecía de efectos jurídicos, era nula de toda nulidad. De modo que con su anulación lisa y llana por parte de la legislatura, todo volvía a foja cero.

Es posible verificar, en un caso, una concepción jurídica muy conservadora (Luder) que acepta el “derecho” de los gobernantes de facto a elaborar cualquier ley, incluso, una autoamnistía (independentismo político militar); en el otro, una fórmula muchísimo más audaz en su formato ya que limita los derechos del gobierno sin desconocer, in totum, su aptitud legal. El artificio está al servicio de evitar, trabar, limitar, hasta donde resulte posible, todo intento de auto-preservación de las Fuerzas Armadas (de su cuerpo de oficiales) que no esté referenciado en el comportamiento del partido del estado. Vale decir, en el estado mismo.

Y una lectura crudamente política puede formularse así: ustedes no tienen nada que temer de mí puesto que actuó consensualmente: soy el jefe del partido de gobierno (Luder). Ustedes tienen la obligación de acatarme porque soy el jefe del partido del Estado (Alfonsín).

De modo que el discurso antimilitar (por contigüidad y desplazamiento se tras formaba en discurso democrático) quedaba en manos del radicalismo. Ese discurso, en términos de compulsión electoral, tras ocho años de gobierno militar directo, 30.000 desaparecidos, 300.000 obreros industriales menos, una guerra pérdida con la OTAN, el deterioro general de la sociedad argentina, suponía un recorte brutal a la capacidad de convocatoria una nueva audiencia política. El voto independiente, la multitud que nunca había votado (los menores de 28 años en 1983) quedaban a merced del discurso radical. La UCR no desaprovechó su oportunidad.

Las dos colectividades políticas mayoritarias eran presa de su propia historia. A la UCR, la década infame (proscripción y fraude contra los radicales), el respaldo de un segmento de las Fuerzas Armadas al primer y segundo gobierno peronista, el derrocamiento de Illia, le alimentaban un tono naturalmente antimilitar. Si a esto se sumaba la derrota del arco popular y el avance arrollador de la reacción social y política, el espacio alfonsinista se dibujaba perse. El cruce de ambos tópicos (derrota popular, reacción social) conformó definitivamente la propuesta radical.

El peronismo, por su parte, intentaba rehacer su vieja y esclerosada fórmula del frente nacional. En esa imagería las Fuerzas Armadas habían jugado su papel (Perón era un general de la Nación) y la dirección sindical otro: la

cabeza de la columna vertebral. La ausencia de lucha obrera significativa, su extrema debilidad defensiva, la convivencia de la dirección sindical con la dirección militar, sumadas al terror, al impacto desmoralizador de una derrota histórica irreversible (electoralmente inmodificable) produjeron el resto. Es decir, el peronismo buscó y obtuvo en los militares un aliado imaginario, materializando un enemigo real de la sociedad civil. En octubre del '83 las diferencias estuvieron a la vista de todos.

V

El peronismo fue derrotado por primera vez, con limpieza, abrumadoramente, en las urnas. El grueso del prestigio político de Alfonsín provino de ese hecho. El nivel de movilización alcanzado durante la campaña electoral, por parte del radicalismo, obliga a retrotraerse hasta 1946. Sólo por aquel entonces la UCR estuvo en condiciones de disputar la calle. El peronismo, el cuarto peronismo, había perdido el monopolio político de la clase obrera y, simultáneamente, el viejo sistema de adhesiones estaba definitivamente quebrado.

El flamante jefe del partido del gobierno, el flamante jefe del partido del Estado, coronaba así una dilatada carrera. Siempre militó en la misma fracción radical y desde allí, en un país rehecho, resignado, sin ninguna voluntad de lucha, expresó un deseo sumamente anhelado: vivir en paz.

Pocas veces programa tan simple, tan sencillo, resultó, resulta, de tan imposible aplicación. Por eso la política oficial se redujo a sostener que todo lo propugnado era para alcanzar ese objetivo. En ese sentido se desarrolló el debate sobre el Beagle y, si se considera que la frontera con Chile nunca estuvo poblada de escaramuzas armadas, queda claro que se votó contra otra guerra y por otra paz.

La progresiva pero clara desmovilización posterior a la campaña electoral constituye un dato central. La atonía política era enorme. El arco alfonsinista no tenía excesivas razones para proseguir su dinámica inicial y el antialfonsinismo (suponiendo que haya existido y exista fuera de la virtualidad conceptual) se mostraba moroso, confundido, desorientado.

En principio la sociedad argentina requería, requiere, construir el balance de sus lacras, sus nuevas lacras, sus nuevas posibilidades, sus nuevas relaciones de fuerzas sociales y políticas. Todavía no lo ha hecho. Ese balance no se realiza ni rápida ni alegremente. Forma parte del duelo. Es el eslabón final de una derrota asumida como tal. Ese balance falta. En esa dirección apuntamos.

El alfonsinismo, la UCR, dio muestras de una curiosa vitalidad como partido de gobierno. Clausewicz explicó hace décadas que el objetivo de la guerra es desarmar al enemigo. Algo olvidó el viejo pensador prusiano: los derrotados, los des-armados en el sentido más amplio, pueden trastocar, volver, voltear, vaciar, su propio programa, sustituyéndolo por el programa del des-arme. El desarme evita la lucha y, en consecuencia, el único programa, todo el programa, sería evi-

tarla. Evitar la lucha es por cierto una fantasía colosal, pero opera políticamente como perpetuación de la derrota, como eternización de la impotencia.

La primera batalla contra el alfonsinismo hubiera debido pasar por la reintroducción de la problemática revolucionaria como problemática del presente. No con el estúpido argumento “la revolución estallará mañana por la mañana”, sino con este otro: la revolución es el problema central de nuestro tiempo, y ustedes, les guste o no, lo sepan o no, se dedican a él, pero desde una perspectiva siniestra: evitarla, impedir el rearme intelectual del campo popular.

El alfonsinismo no fue la tregua democrática que los derrotados requerían para rehacerse, para rearmarse, como prudentemente pregonaron sus defensores socialdemócratas. Tampoco un truco, una estafa publicitaria, una hábil estratagema de un político talentoso.

Fue, es (porque el alfonsinismo no termina con el gobierno de Raúl Alfonsín, ni en los límites de la UCR) el tono del capitalismo dependiente estabilizado: el programa de la derrota permanente, la voluntad de volver a rendirse sin lucha. Es que la lucha para las víctimas del horror del “Proceso”, para los procesados sin retorno, equivale al horror de otra derrota, a la muerte inevitable.

Entonces, para evitar la muerte toda lucha debe ser ocluida y, para evitar la lucha, toda diferencia conceptual (el socialismo, por ejemplo) debe ser eliminada del escenario político y social. La cadena del horror queda construida, entonces, del siguiente modo: evitar la diferencia, el debate sobre la diferencia; debaten los que están de acuerdo sobre las maravillas de la democracia sin debate, porque el debate remite al combate y el combate a la derrota, al exilio y a la muerte. 1500 obreros desarmados tomaron la planta de General Pacheco de la Ford. Para desalojarlos, 2000 policías armados hasta los dientes⁷ intimaron la rendición. No era el caso de Semana Santa, ni de Villa Martelli; los obreros se rindieron. Entregaron la planta. La comisión interna, los activistas, los trabajadores combativos, fueron despedidos.

—Bueno, se equivocaron.

—¿Cuál fue el error? ¿Los 2000 policías armados de Itaka?

—De ningún modo. La toma de la planta.

Los obreros no podían, no pueden, tomar plantas industriales para luchar por su salario. Si lo hacen, tendrán que ser educados por el partido del Estado, por el gobierno alfonsinista. Todos aprendieron, todos callaron. Pocos, muy pocos, defendieron la toma. La mayoría devino especialista en táctica sindical: la toma era un “error imperdonable”. Entonces, para evitarla, para bloquear la lucha, la posibilidad misma, el gobierno construyó un enfrentamiento que no requirió derramamiento de sangre. Se imponía desde la razón, en la asimetría de los términos (2000 policías armados, 1500 obreros desarmados), la clave de su comprensión. Esa es la novísima cultura política. Ahí se verbaliza el discurso de Parque Norte.⁸

Para el bloque de clases dominantes, la inteligencia política del gabinete, salvo necedades de circunstancias, resultaba admirable. Cada vez que la oposición parecía dar pie con bola, cada vez que lograba suficiente consenso para torcer la política oficial, todo saltaba hacia adelante. La realidad se fugaba desesperadamente. La oposición se indignaba. Acusó al gobierno de prestidigitación política, Alfonsín replicó: son unos enanos. Tenía razón. La política no era alfonsinista porque el gobierno sacaba conejos de la galera. El gobierno los sacaba porque sus antagonistas parlamentarios reducían la crítica a cuestionamientos secundarios que de ninguna manera guiaban su accionar. El gobierno tenía un relevamiento reaccionario de la derrota, pero tenía relevamiento y desde allí operaba. El retroceso oficial no debe atribuirse, casi en ningún caso, a la acción opositora. Era más bien el resultado, el efecto, de su propio desenvolvimiento político. Para decirlo sintéticamente: era su precio.

Las carencias de la oposición obligaron al presidente a dar clases de alfonsinismo. Pero algo no era claro: ¿los partidos opositores aceptaban, admitían, las nuevas reglas del juego? Si era así, debían asumir como propio el programa del partido del Estado, del bloque de clases dominantes. Si no era así, debían plantear lisa y llanamente la transformación revolucionaria de la sociedad argentina. De más está decirlo: esta transformación caía, cae, fuera de la frontera política admitida, fuera del territorio de la democracia de la derrota que insensiblemente continuaba.

Un programa revolucionario no es, como afirman ciertos doctrinarios estériles, un ordenamiento para la sociedad futura: el mapa de la utopía. Es, antes que otra cosa, un modelo jerárquico-prioritario de tareas políticas partidariamente encaradas. Las revoluciones a las que la organización revolucionaria deberá someter su cuerpo, para que el sujeto histórico construya su para sí político. Es decir, el dispositivo capaz de reproducir, de producir, su propuesta estratégica como transformación social.

Entonces, el programa final solamente importa en tanto sea indicación de “por dónde empezar”. Por eso, bolcheviques y mencheviques pudieron compartir su programa final hasta quince minutos antes de octubre del ‘17, sin que esto les impidiera militar en veredas opuestas.

Volvamos a comenzar. Hasta que Juan Vital Sourrouille asumió la titularidad del Palacio de Hacienda, el programa radical resultaba errático. La política en materia de deuda externa (asignación completa de los recursos internos por el tamaño y el impacto de la deuda) admitía teóricamente diferentes sesgos. Bernardo Grinspun se negó, mientras fue ministro de Economía, a satisfacer la solicitud inicial de Raúl Prebisch: redactar un programa económico.

El entonces asesor presidencial explicó que la banca privada extranjera, el Fondo Monetario Internacional, los empresarios nativos, todos los que importan,

en suma, exigían programa. El obstinado ministro elaboró uno solo: su malhumor. Esta carencia resultó a la postre sintomática; sobre todo, cuando el peronismo en todas sus versiones tampoco lo produjo. La razón era simple: Grinspun sabía qué clase de programa debía confeccionar. De modo que sin rechazar abiertamente lo que debía hacer (pagar la deuda externa) navegaba a dos aguas. Toreaba de mala manera a los funcionarios del Fondo y a regañadientes, resistiéndose, expresaba las últimas agallas pequeño-burguesas del arco social que lo votó, ejecutando una política zigzagueante que amenazaba (verbalmente por cierto) el pago de la deuda, mientras pagaba con la otra mano.

Un ministro puede dar un portazo, enojarse con un funcionario del Fondo, pero hay algo que no puede: tener una política que no es en definitiva la de su gobierno, la del presidente. En caso de tenerla, su situación es delicada y por lo general su destino resulta manifiesto: renunciar. Bernardo pensó que contaba con Raúl, con los izquierdistas de su partido, para el juego antiimperialista. Erró duro. Así le fue.

De allí en más, todo resultó bastante claro. El radicalismo tendía a reclutar cuadros diferenciadamente. Para el partido de gobierno tomaba a los viejos barones de Renovación y Cambio convenientemente mixturados con los jóvenes de la Coordinadora. Para el partido del Estado (ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo), a extrapartidarios sin clara tradición política o "jóvenes" peronistas actualizados. La posmodernidad usa trajes de confección y anteojos universitarios.

Estos equipos lograron elaborar una propuesta original, si por original se entiende la falta de programas similares, lo que habla de la solvencia profesional de sus integrantes. En un debate serio es preciso admitir que la política económica tal como había sido pergeñada (pagar los intereses de la deuda externa) no ofrecía demasiadas posibilidades.

Dentro de esa pobreza esencial, el camino elegido (Plan Austral, integración económica con Brasil) obtuvo la mayor masa de divisas duras mientras resultó de ejecución posible.

Si se tiene en cuenta que la deuda externa es, independientemente de su origen, deuda pública, y que la deuda pública se paga con recaudación fiscal, queda claro que la lucha antiinflacionaria, por ejemplo, no podía y no puede pasar de cierto rango sin transformar radicalmente la estructura del Estado, ya que cualquier intento de recortar el gasto choca con una reducción imposible: los ocho puntos del PBI que absorben el gasto de los intereses. Dicho epigramáticamente: la deuda externa generó una formidable presión inflacionaria al esterilizar todo intento ortodoxo de equilibrio fiscal, dada su incidencia en el gasto público.

Además, el principal generador de divisas era y es el comercio internacional, y al aumento de los precios agrarios internacionales se sumaban los subsidios de los países acreedores a su propia producción agropecuaria; el programa de en-

tonces, la política de entonces, resultaba insostenible en el tiempo.

Por eso, las exportaciones tradicionales dejaron constituirse en el caballito de batalla para el aumento continuo de excedentes comerciales. De ahí que la fórmula tradicional del FMI (aumentar las exportaciones de materias primas y reducir la importación de bienes industriales intermedios) no haya podido seguir siendo política oficial unificada.

En estas condiciones el programa de exportaciones mutó su naturaleza. Era preciso colocar productos industriales con cierto valor agregado y alta complejidad para acceder a las codiciadas divisas norteamericanas. En consecuencia, a caballo de la deuda externa se impulsó un curioso programa de inversiones industriales. Ese fue el plan Lavagna.

Para ejecutarlo fue preciso reasignar recursos financieros a industrias capaces de competir, con relativo éxito, en las condiciones del mercado mundial. Como no podía ser de otro modo se potenció la concentración económica, ya que la producción para la exportación de bienes industriales sólo era posible a partir de las ramas concentradas, de las industrias líderes de cada franja productiva.

Resumiendo: la Unión Cívica Radical, en su carácter de partido del Estado, ejecutó la política del bloque de clases dominantes: transferir recursos producidos localmente para territorializar los en otros puntos del mercado mundial, como capital líquido, por un total de 18 mil millones de dólares. Esa política fue corolario de la masiva transferencia de capital materializada entre 1978 y 1982, e impuso, por su propia lógica, un permanente drenaje de capital y divisas que tuvo como límite económico las condiciones de monetización del mercado y no tuvo límite político porque éste hubiera requerido de la resistencia activa del arco popular.

Mientras Sourrouille timoneó el Ministerio de Economía ajustándose estrictamente a los intereses del bloque de clases dominantes, aun en su comportamiento exclusivamente instrumental, táctico, la concordancia entre el gobierno, la UCR, y el bloque de clases hegemónicas resultó completa. Sin embargo, tanta destreza tenía un límite material: el giro al exterior de los servicios de la deuda.

La economía argentina había construido su barrera intraspasable: el valor de los activos físicos (inversiones de capital) radicados en el territorio nacional. Era preciso desatender los requerimientos financieros de la banca, porque los intereses del bloque hegemónico ya no coincidían puntualmente con éstos. Podríamos formularlo así: la política para pagar la deuda había producido una caída de la capacidad productiva medida en dólares; esta caída implicaba una reducción de la tasa media de ganancia y esta reducción, de persistir, no era más que una devaluación del capital físico en su conjunto; es decir: una desvalorización de los activos territorializados en la Argentina pertenecientes al bloque de clases dominantes: una descapitalización brutal.

Una política económica que no contemple la defensa del capital radicado en el territorio nacional no puede ser considerada, seriamente, política del partido del Estado; al menos política unificada del partido del Estado.

Sourrouille, para compensar la caída de la tasa media de ganancia y evitar la fuga hacia el dólar, construyó un dispositivo financiero: la deuda interna del Estado, a la que sumó tasas de interés fuertemente positivas. Con esto lograba un doble objetivo: aumentar las reservas en dólares del Banco Central (ingreso de capitales golondrinas del exterior) y conservar los australes en el sistema financiero. "La propuesta tenía un límite que estaba dado por la masa monetaria existente. Cuando esa masa resultó inferior a la deuda interna del Estado, la catástrofe se volvió inevitable. Para impedir que esto sucediera, Sourrouille quemó las reservas de libre disponibilidad (dólares) del Banco Central.

Esta política, esta destrucción de reservas líquidas, ya no obedecía a los intereses del partido del Estado, sino a las exigencias de la Unión Cívica Radical como partido de gobierno a cargo del gobierno; es decir, a las exigencias electorales de la lucha contra el Partido Justicialista. Por eso, la crisis de febrero de 1989, antes que nada, constituye el agotamiento de tanto virtuosismo instrumental.

En este marco, la asignación de recursos internos liquidó todo intento de crecimiento económico, aun dentro de los estrechos límites del capitalismo dependiente en su faz monopólica.

VII

La Unión Cívica Radical retrocedió en 1987, para ser derrotada definitivamente en 1989.

El alfonsinismo, sin embargo, avanzaba a toda máquina.

En 1983, Raúl Alfonsín conquistó el 52 por ciento de los votos emitidos. Italo Argentino Luder, apenas el 40. UCR y alfonsinismo eran, todavía, una unidad sin desenvolver. Cuatro peronismos coexistían en un mismo escenario político.

El "Proceso", al bloquear la descomposición del cuarto peronismo (la caída de Isabel gatillo una ilusión que sobrevivió hasta octubre del '83), forzó, fabricó, un supuesto: la existencia de un (¿uno?) movimiento (era quietud lacustre) obrero (sólo en términos estrictamente económicos) peronista. Su negativa a presentar batalla frontal contra el "Proceso" parecía parte de una estrategia política. Ya caballo de esta confusión, se escamoteó la derrota, la dispersión, la descomposición de este peronismo: el cuarto.

El tercer peronismo, el de Cámpora y los Montoneros, recorría como un débil hilito militante a los sobrevivientes de la Jotapé. Pero su base social había huido. La Unión Cívica Radical le dio cabida, tiñiendo de rosado muy suave la tradición liberal del partido de Alem.

El segundo peronismo, el de Vandory la Resistencia, el de Felipe Valiese y Lorenzo Miguel, era el más nutrido. A tal punto que Lorenzo parecía el timonel verdadero de un barco sin timón. La fantasía dispuso de un borde real: Miguel

era el segundo de un partido cuyo primero no existía. Pero los cuatro peronismos, todavía ferozmente entremezclados, rechiflaron el equívoco y Lorenzo dejó sus ambiciones políticas para la eternidad. El tiempo del vandomismo había quedado demasiado atrás.

La mirada del amo no basta para convertir a un sindicalista en jefe político. Los trabajadores tienen todavía algo que decir. Y lo dijeron claramente: un grueso segmento votó a la UCR. Los otros, los que votaron al primer peronismo (el de la abundancia), al segundo (el de la lucha sin coronar), y al tercero (el de las ilusiones desvaídas) ya no votaban a sus direcciones sindicales. Votaban a pesar de ellas. En algún sentido, lo supieran o no, votaban contra ellas.

En 1987, dejó de existir ese caleidoscópico 1983. El cuarto peronismo fue reconstruido por la renovación, primero, y por el menemismo, después. Es decir, su larga é insensible muerte ha comenzado. Las banderas de los tres primeros (sin las sutiles distinciones que las separan) fueron completamente desechadas. En ningún afiche de la campaña del '87 se podía leer "Soberanía Política. Independencia Económica y Justicia Social". La palabra "revolución" (aunque nacional) fue borrada del léxico político renovador. Y el menemismo le añadió "productiva" para tranquilidad de tirios y troyanos.

El doctor Menem utilizó, sin embargo, algunos fragmentos de artillería pesada para la lucha interna. Una vez que el doctor Cafiero dejó de ser su contendiente, todos los arrestos duros perdieron su razón de ser. Era imprescindible demostrar que se estaba ante un político serio, un hombre de estado, un jefe del partido del estado. Lo probó sobradamente, así y todo desde el gobierno se superó hegelianamente a sí mismo.

Comenzamos este razonamiento desde un punto: la victoria del alfonsinismo. Esta victoria podría explicarse así: la UCR ya no es el alfonsinismo. Mejor dicho: no es todo el alfonsinismo. Alfonsín fabricó su izquierda y su derecha. La renovación encabezó el viraje y (tal cual lo previera un cumplido e inteligente articulista de la revista Unidos) fue la izquierda del establishment; Alfonsín entregó ese territorio a Cafiero, al cuarto peronismo. La UCD fue la derecha. La UCR, el centro sobre el que se articuló este partido de tres patas.

En 1985, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, esto quedó claro. La grosera versión que encabezaba Herminio Iglesias estaba condenada a la extinción, y la edulcorada de Antonio Cafiero, el otro hombre del balcón, formaba parte del flamante universo oficial. Iglesias, a su pesar, servía para reforzar la idea UCR = alfonsinismo. Trabajo estéril. El verdadero hombre del presidente había comprendido casi mejor que Casella el discurso que potabilizó al PJ. Ya no era "Framini-Anglada, Perón a la Rosada"; era "Cafiero acá, Alfonsín allá". Es decir: una discreta división del trabajo.

Alvaro Alsogaray constituye la verdadera novedad de esta etapa. Una suerte de partido reformista de la UCR y el PJ. Un forjador del manantial ideológico

referenciado en la desregulación y el privatismo. El verdadero crítico de la ineficiencia del capitalismo dependiente argentino, no para abrir un nuevo cauce sino para aceitarlo mediante salvajes inyecciones de mercado. Confirma una dolorosa hipótesis: la confianza en el capitalismo argentino parece directamente proporcional a la crisis que lo recorre.

El doctor Menem es absolutamente consciente del novísimo sistema político. A tal punto que su gabinete presidencial está construido a su imagen y semejanza. El enemigo del cuarto peronismo ya no es social, ni siquiera político: asume una forma particularmente abstracta, en el peor sentido de la palabra: es la “cultura de la especulación” “quien debe ser vencida por la “cultura de la producción”.

Pocas veces tantos pudieron tan poco. Pocas veces un sistema político fue tan brutalmente resignificado. El ‘Proceso’ iniciado en 1976 trituro al viejo sistema de partidos al deshacer las condiciones de reproducción ampliada del capital; es decir, el modo en que el bloque de clases dominantes realiza sus negocios: limó las asperezas internas, liquidó las diferencias. Y el sistema de partidos referenciado en el bloque de clases dominantes no tiene otro camino que asumir esta nueva identidad, rehaciendo la propia. Para que se entienda: para seguir siendo partidos del estado, deben rehacer los argumentos con que se constituyen en partidos de gobierno.

Antes del ‘75, antes del Rodrigazo, el peronismo había sido la dirección política del movimiento obrero durante treinta años. No es más. La dirección sindical es “peronista” sólo en el sentido del pasando de sus integrantes individuales; Cafiero, que derrotó a Casella en el cordón industrial, mantuvo vínculos con una fracción minoritaria de la CGT; Alfonsín, por su parte, fue el verdadero referente de la clase obrera mientras presidió la república; es que ella no actúa políticamente desde 1976.

Para el gobierno alfonsinista hubo dos elecciones simultáneas; una tuvo lugar en septiembre del ‘87; otra, en Semana Santa del mismo año. La SRA, la UIA y ADEBA firmaron el Acta de Compromiso Democrático, como lo hicieron la CGT y el grueso de los partidos políticos. Por ese trámite Alfonsín no sólo validó su condición de jefe político del bloque de clases dominantes, sino también del bloque de clases dominadas.

El cambio sin cambio de las elecciones de septiembre del ‘87 reforzó estos términos. Los obreros que votaron al peronismo no votaron como obreros, sino como ciudadanos. La tensión social se parlamentarizaba: en la fábrica, los sindicatos; en el poder, los políticos responsables.

Aun los políticos responsables soportan tropiezos. En la lucha parlamentaria, de un tropiezo se sale (quién lo duda) mediante una ley. Hubo un caso en que la ley tuvo nombre y apellido: Obediencia Debida.

Ley de Obediencia de-vida. ¿De cuál vida? ¿De qué ley?

El Congreso sancionó la ley de Obediencia Debida. La Suprema Corte de Justicia ratificó su contenido constitucional. Tanto el Parlamento como la Corte actuaron con los ritmos de la crisis militar. No faltan los que dicen: esa ley es el fruto de la primera crisis militar.

Algo era evidente: separar la crisis de la ley volvía incomprensibles ambos términos. Reducir un término al otro pronunciaba una línea de explicación fuertemente inducida por el discurso oficial: la “corporación militar” avanzaba sobre el gobierno civil; la ley satisfacía los requerimientos de los “golpistas”, suponía un retroceso del “gobierno civil”, esta cesión posicionaría a los militares para un nuevo pedido, hasta que, finalmente, pedirían todo, es decir: el gobierno; para obtenerlo darían, como siempre, un golpe de estado. Más o menos éstos fueron los argumentos del Partido Justicialista en la polémica parlamentaria.

Los “realistas”, mucho más cínicos, compartían la línea argumental difiriendo en un elemento: los militares no querían el golpe, pero si cambiaban de idea y lo querían, el golpe sería irresistible. Para que no quisieran alcanzaba la ley. Por eso resultaba imprescindible aprobarla. Más o menos éstos fueron los argumentos radicales en el recinto.

Esta operación resultó posible por los bolsones de miedo sin metabolizar que atraviesan a la sociedad argentina. En el terreno conceptual, sin embargo, había que confundir demasiadas cosas: a Raúl Alfonsín con Arturo Frondizi; 1987 con 1955, olvidando 1976; a la derrota en manos del ‘Proceso’, con la “victoria” de mano de la democracia.

Volvamos al texto de la ley: los militares que cumplieron órdenes superiores sin cometer excesos no son culpables. Y no lo son porque las órdenes del estado no son delito. La idea de un “Estado terrorista” es prerromana, prejurídica. El estado supone un ordenamiento jurídico legítimo, al menos para el arco social que se expresa a través de su maquinaria. Entonces, el funcionario responsable de la puesta en práctica, de la correcta aplicación de una orden, no es, no puede ser, sino un funcionario probo. Y un funcionario probo no puede ni debe ser acusado. Es inocente por definición.

Este perfil de la obediencia construye otro para la desobediencia, para la desobediencia de vida. ¿En qué casos un oficial puede desobedecer una orden? En caso de que para cumplirla deba cometer delito. Pero si la orden ha sido orgánicamente impartida, si la cadena de mandos ha sido respetada, no puede ser delito puesto que constituye una política del estado que debe cumplir. Entonces, ninguna orden orgánica, absolutamente ninguna, puede ser desobedecida por desobediencia de vida. Por eso el comisario Echecolatz salió en libertad tras soportar condena judicial (23 años) y por eso el teniente coronel Rico fue dado de baja.

En ese mismo recorrido queda fijada la obediencia indebida. Y es así: cuando un oficial rompe la cadena de mandos e imparte una orden (por ejemplo en

Semana Santa), incurre en delito de asociación ilícita para delinquir, como mínimo, y en atentado contra la seguridad del estado, como máximo. Esto es, en desobediencia indebida.

De modo que toda la legislación que se aprobó tendía a un solo objetivo: reforzar la obediencia, reforzar la cadena de mandos, asegurar para los que la respetaran todas las prebendas del Estado; descargar sobre los que la violaran todos los rayos y centellas del cielo burgués. En aquel estado de la crisis militar, no existía más que un solo modo de leer este comportamiento: reforzar a los oficiales procesistas contra los malvinizados.

De ahí que no se dictara una ley de amnistía. La amnistía supone ley de olvido. No hubo delito, sus efectos jurídicos desaparecen y consecuentemente los transgresores no son culpables de nada. Con la obediencia debida no se eliminó el delito, se determinó que no lo era en función de la cadena de mandos; por estar inmerso en el comportamiento estatalizado gozaba de absoluta impunidad. Se reforzaba la idea de monopolio de la fuerza como jurídicamente legítimo dentro y fuera de la ley, del texto de la ley. Vale decir, en cumplimiento de la obediencia debida un oficial y un verdugo resultaban absolutamente indistinguibles: ninguno de los dos, como en la Antigüedad, vivía en Roma. Ambos, esclavos del Estado, estaban del otro lado de la muralla.

Eso no es todo. La amnistía hubiera beneficiado a todos los culpables de determinado delito sin ninguna excepción: esto incluye a las juntas militares juzgadas, lo que hubiera destrozado la notable operación ideológica que el alfonsinismo ejecutó brillantemente (juzgara los procesistas para declarar inocente al “Proceso”, juzgara los responsables militares para cubrir a los beneficiarios civiles). Y esto, con o sin crisis militar, el gobierno de Alfonsín no estuvo dispuesto a disolverlo. Es que disolverlo equivalía a repreguntar: ¿quiénes son los beneficiarios del “Proceso”, ¿cuáles sus víctimas? Es decir, el nombre del vencedor, el del vencido.

Recapitulando, la primera crisis militar volvió digerible una operación que sin una adecuada incentivación del miedo hubiera tenido mayor costo electoral. No se trataba de una “cesión”, de una “traición”, de una “agachada”, sino de una política claramente definida que se ejecutó a los empujones.

Resulta innegable que Alfonsín hubiera preferido imponer más claramente sus términos al cuerpo de oficiales. Una cuenta le salió

mal. Calculó que los efectos de una política de aislamiento, de degradación salarial y de vacío ideológico bastarían para imponer un auto-castigo ejemplar y restablecer, por esa vía, la cadena de mandos con máxima dureza. Descubrió que jugado sobre el límite, un puñado de oficiales conquistó la adhesión pasiva para no presentarse a Tribunales.

Esto no supuso que el amo perdía su condición de tal; sino que la victoria alfonsinista sobre las Fuerzas Armadas tenía límites intraspasables, y que traspa-

sarlos ponía en peligro la debida obediencia, la obediencia al Estado. No se trataba de evitar un golpe que nadie intentó, sino de garantizar la función histórica de las Fuerzas Armadas: ser el brazo armado del Estado burgués.

Ahora es posible responder a la pregunta: ¿obediencia de qué vida?, ¿de cuál ley?

No se trata de evitar ninguna masacre. Se trata de que las masacres sean adecuadamente ordenadas. Todo el sistema tiende a reforzar la autoridad, el principio de autoridad, la vida del cuerpo de oficiales tal cual es (procesista), a condición de no apartarse ni un milímetro del dictat presidencial. Sin desdecir ese sentido, el Dr. Menem (tal cual lo viene anunciando) podría indultar (pero de ningún modo amnistiar) a todos o a algunos de los militares condenados.

Es que matar no es delito. Delito es negarse a cumplir la orden de matar orgánicamente impartida. Por eso en el Tiro Federal puede leerse en el frontispicio: “Aquí se aprende a defender a la Patria”.

IX

Desde el momento en que la conducción estratégica de la guerra contra la guerrilla adoptó los Grupos de Tareas (GT), como táctica adecuada para el enfrentamiento, optó por la disolución de la cadena de mandos. Sobre todo, porque los GT constituían entonces una negación del Reglamento Militar. Es decir, equivalían a una suerte de logia (no entró todo el cuerpo de oficiales) con una ley de selección donde rotativamente participaban muchos, en distintos roles, pero donde también se podía definir un adentro y un afuera que no significó un adentro y un afuera de la institución.

Este modelo operacional supuso, de un modo consciente, además de la quiebra de la cadena de mandos, la politización completa del cuadro de oficiales. Los conscriptos no eran utilizados sino en actividades de control perimetral o, en muy contadas oportunidades, en apoyo de los GT como masa de reserva intimidatoria. El cuerpo de oficiales prestó su cuerpo para la conformación de los GT y de allí emergió la conducción operacional de combate. Por eso, el teniente Astiz jugó un papel significativo a pesar de la pequeñez de su grado y por eso, algún que otro capitán de navío cumplió tareas puramente administrativas.

Es preciso añadir que los GT no estaban integrados por hombres de una sola fuerza armada. Incorporaron, además, civiles de la comunidad informativa y policías, sin olvidar que los suboficiales tuvieron una actividad particularmente destacada. Tal es así, que en la Marina algunos de ellos fueron cooptados al cuerpo de oficiales aunque no recorrieran el escalafón completo.

Con el exterminio de la guerrilla y la desaparición de sus integrantes, los GT dejaron de tener sentido operacional y sobrevivieron semiinformalmente. La guerra de Malvinas encontró a las Fuerzas Armadas a medio camino: los GT no habían desaparecido del todo y el cuerpo de oficiales no había sido reorganizado sobre otra base.

Como es sabido, el comando de una fuerza armada supone, requiere, una hipótesis de conflicto. Esta hipótesis permite asignar recursos físicos y humanos, priorizar actividades, etcétera. Vale decir, la hipótesis de conflicto constituye un instrumento estratégico requerido para conducir una fuerza al combate. La supervivencia de los GT equivalía a una hipótesis de conflicto ya desenvuelta, superada, que no era reemplazada sino en el papel por otra nueva. Malvinas muestra unívocamente este notable déficit de comando; es decir: supervivencia de los GT sin adecuación al nuevo objetivo militar (recordar el papel de Astiz en Georgias). Esa fue la primera derrota, la derrota conceptual. La otra, sobrevino en el teatro de operaciones.

Al dictarse la ley de Punto Final el total de procesados ascendía a 450. Los oficiales de las tres fuerzas sumaban 173 y el resto (277) estaba integrado por miembros de las fuerzas de seguridad (Policía Federal, provincial, servicios penitenciarios, etcétera) y suboficiales. Al ingresar la ley de Obediencia Debida enviada por Alfonsín al Congreso (antes de que el Senado la modificara), el número de procesados se reducía a 230: algo más de un centenar de oficiales; el resto (122) eran suboficiales e integrantes de las fuerzas de seguridad. Tal como se aprobó la ley, la cantidad de procesados se redujo a 100, de los cuales 68 eran oficiales de las tres armas y los 32 restantes, suboficiales e integrantes de los cuerpos de seguridad. A la primera versión de Obediencia Debida se la conoció en la jerga castrense como ley Rico; a la segunda, como ley Caridi. En la primera quedaron condensadas las exigencias del cuadro de oficiales; en la segunda, las presiones de la cúpula castrense.

Para Caridi, el problema era sencillo: tenía que quedar claro para todos que negociar con él resultaba institucionalmente más eficaz que alzarse en armas. Los que no fueran protegidos por las mallas de ninguna de las propuestas legales quedaban automáticamente fuera de la institución o, al menos, del servicio activo.

La posibilidad de generalizar el conflicto sobre la base de dinamizar estos elementos residuales, no podía ser seriamente considerada en la actual relación de fuerzas del bloque de clases dominantes.

Las dos rebeliones posteriores mostraron idéntica composición en distintas proporciones: los insurgentes activos eran un puñado, y el resto eran insurgentes pasivos (tropas "leales" al gobierno): expresaron pocos deseos de reprimir. Aun cuando Caridi pudo tomar prisionero a Rico, lo hizo en el marco de un acuerdo inter pares. Y todo volvió a foja cero cuando el arresto del coronel Seineldín tuvo que hacerse a costa de la renuncia del general Caridi.

Sin embargo, algo había cambiado en las dos últimas rebeliones: ya no se discutía la seguridad del cuerpo de oficiales, sino del espacio que tenían —en su condición de brazo armado del Estado— para construir una política diferenciada de la que el gobierno ejecuta en su condición de fiel intérprete del programa del partido del Estado. En rigor, la discusión sobre las condiciones de represión,

primero, y la guerra de Malvinas después, no fue sino un debate —con sordina— sobre el papel de las Fuerzas Armadas.

Por el momento, el bloque de clases dominantes no ha cedido ante el intento militar de darse autonomía, incluso hoy, que considera un indulto presidencial.

Un problema, no obstante, queda sin resolver: el partido del Estado no pudo reorganizar su brazo armado. Para que se entienda: si el coronel Seineldín, por ejemplo, fuera nombrado jefe del Estado Mayor y esta elección contara con el beneplácito del cuadro de oficiales, eso no equivaldría a la reconstrucción de la cadena de mandos. Muy por el contrario, supondría su quiebra más intensa, su parlamentarización lisa y llana.

La cadena de mandos no puede depender de la buena voluntad de sus integrantes, sino de la obediencia debida al estado, de la indiscutible disposición a obedecerlo. En suma, de la capacidad del estado para comandar su brazo armado.

El doctor Menem recibió las Fuerzas Armadas en condiciones de intensa descomposición. Nunca el capitalismo argentino soportó una crisis tan virulenta, nunca contó su aparato estatal con tan poca aptitud armada para defenderse, y nunca el campo popular conoció semejante nivel de atonía política. Vale decir, la seguridad del Estado admite dos soluciones que no resultan excluyentes entre sí: a) recomponer la cadena de mandos; b) conservar, reconstruir, reforzar la derrota popular.

XI

En el marco general de una crisis global de la sociedad argentina, el doctor Menem gobierna. Los sectores populares soportan las peores condiciones de vida sobre las que se tenga memoria estadística. En esta situación un partido sin tarea histórica, el cuarto peronismo, se debate entre dos polos lógicos: el primero está determinado por los requerimientos de su base social; el segundo, por las novísimas exigencias del bloque de clases dominantes. Los primeros requieren atender el salario obrero, el consumo popular, la educación y la vivienda. Las otras están determinadas por la normalización de las condiciones de reproducción ampliada del capital.

No hay mucho margen entre uno y otro requerimiento. Es preciso reconocer que la transformación de la estructura política no deja lugar para ninguna vacilación. En el cuarto peronismo no coexisten tendencias con distinta posibilidad de ejecución pero con idéntica garantía de disputa semilegítima sobre el destino común. La suerte está echada. Y esa suerte terrible lanza a la clase obrera hacia una diáspora política. Del destino que esa diáspora sufra depende el de la sociedad toda.

Notas

¹ Los paros ruralistas fueron entre junio y julio de 1987.

² El 13 de septiembre de 1988, en la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca fue abucheado, sin que pudiera pronunciar Su discurso. El presidente Raúl Alfonsín caracterizó al auditorio in situ de fascista “por no escuchar al orador”, y el presidente de la Sociedad Rural defendió implícitamente los alfilerazos contra la investidura presidencial. Ver La Nación del 14/8/88.

³ Las crisis militares se produjeron en este orden: 18, 19, 20 y 21 de abril de 1987, 16, 17, 18 y 19 de enero de 1988, y 4 y 5 de diciembre de 1988.

⁴ Alfredo Eric Calcagno, La perversa deuda argentina, pág. 46. Editorial Legasa;1985.

⁵ Instituto Nacional de Estadística y Censos, Boletín mensual.

⁶ “Mil y un modos de sobrevivir. Crítica del discurso de Parque Norte”, Consignas N° 1, 1987.

⁷ 25 de junio de 1985.

⁸ “Mil y un modos. ..”, ibid.